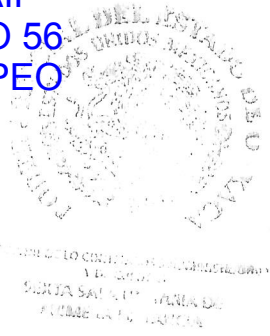


57

DATOS
PERSONALES
PROTEGIDOS
POR EL
ARTÍCULO 116
DE LA LGTAIP
Y ARTÍCULO 56
DE LA LTAIPEO



SEXTA SALA UNITARIA DE PRIMERA
INSTANCIA DEL TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE
CUENTAS DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE OAXACA.

EXPEDIENTE: 57/2017

ACTORES:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMANDADO: COORDINADOR GENERAL
DE LA AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA.

OAXACA DE JUÁREZ, CENTRO, OAXACA A 7 SIETE DE DICIEMBRE DE 2017 DOS
MIL DIECISIETE.-----

VISTOS, para resolver los autos del juicio de nulidad de número 57/2017, promovido
por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en contra del COORDINADOR GENERAL DE
LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO DE OAXACA.-----

RESULTANDO:

1°. **Presentación y datos de la demanda.**- Por escrito recibido el 16 dieciséis de
junio del año en curso, en la Oficialía de Partes Común del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX demandó
la nulidad del oficio número 1622 emitido por el Departamento Jurídico de la Fiscalía
General del Estado de Oaxaca de fecha 5 cinco de mayo del año 2017 dos mil diecisiete.-

2°. **Admisión de la demanda.**- Por auto de fecha 19 diecinueve de junio del 2017
dos mil diecisiete, se tuvo por admitida la demanda promovida por la parte actora en
contra del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía
General del Estado de Oaxaca a quien se le concedió un plazo de 09 nueve días hábiles
para que produjera su contestación, bajo apercibimiento que de no contestar los hechos
planteados en la demanda, afirmándolos, negándolos o expresando los que ignorara por
no ser propios o exponiendo como ocurrieron, se considerarían presuntamente ciertos;
también debería acreditar su personería, con la copia certificada del documento donde
conste expresamente su nombramiento y la toma de protesta respectivas, apercibido que
para el caso de no hacerlo, se declararía precluido su derecho y se le tendría por
contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario. Con respecto a

las pruebas ofrecidas por la parte actora se le tuvieron por admitidas: 1.- Original del nombramiento como Policía Judicial, hoy Agencia Estatal de Investigaciones de fecha 27 veintisiete de febrero de 1995 mil novecientos noventa y cinco; 2.- Original de tres recibos de pago expedidos por el Gobierno del Estado de Oaxaca a su favor con folios 1720, 1706, 1749; 3.- Original del acuse de recibo de fecha 15 quince de julio del 2016 dos mil dieciséis suscrito y firmado por el actor; 4.- Original del acuse de recibo del escrito de fecha 7 siete de marzo del año en curso suscrito y firmado por el actor; 5.- Oficio número 1622 de fecha 5 cinco de mayo del 2017 dos mil diecisiete; 6.- Copia simple de la notificación del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado; 7.- La presuncional legal y humana; 8.- La instrumental de actuaciones. -----

3°.Trámite del juicio.- Mediante acuerdo de fecha 10 diez de julio del 2017 dos mil diecisiete se dio cuenta con el escrito de la autoridad demandada donde se le tuvo contestando la demanda de nulidad promovida por su contraparte, haciendo valer sus excepciones y defensas y por admitidas las consistentes en: 1.- Copia certificada por notario público del nombramiento expedido a su favor; 2.- Copia simple a color de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a su favor; 3.- La instrumental de actuaciones; 4.- La presuncional legal y humana; por otra parte se señalaron las 11 once horas del día 21 veintiuno de septiembre del 2017 dos mil diecisiete para que se celebrara la audiencia final, la cual se desahogó el día y hora señalado estando presente autorizado de la autoridad demandada y sin comparecencia de la parte actora; en la etapa de desahogo de pruebas éstas se tuvieron por admitidas por su propia y especial naturaleza; en el periodo de alegatos se dio cuenta con el escrito de la autoridad demandada mediante el cual formula alegatos y se constató que la parte actora no presentó alegatos por lo que se declaró cerrada esa etapa y se citó a las partes para oír sentencia misma que ahora se pronuncia. -----

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Competencia. Esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca es competente para conocer del presente asunto en términos del artículo QUINTO Transitorio del Decreto Núm. 1367, mediante el cual se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Justicia de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca. Artículos 111 segunda parte fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca; 81, 82 fracción I, 92, 96 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, por tratarse de un juicio en contra de una autoridad administrativa de carácter estatal. -----

SEGUNDO.- Personalidad y Personería.- Quedo acreditada por las partes en términos de los artículos 117 y 120 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca toda vez que Miguel Angel Ortiz Carrasco promueve por propio derecho y por su

DATOS
PERSONALES
PROTEGIDOS
POR EL
ARTÍCULO 116
DE LA LGTAIP
Y ARTÍCULO 56
DE LA LTAIPEO

parte la autoridad demandada mediante copia certificada de su nombramiento 03 tres de enero de 2017 dos mil diecisiete. -----

TERCERO.- Fijación de la litis.- Surge de la ilegalidad planteada por la parte actora respecto al oficio 1622 emitido por el Departamento Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca donde se le informó a la parte actora la improcedencia de su solicitud. En ese orden de ideas, refiere que el oficio antes mencionado, adolece de los requisitos de validez exigidos por el artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca fracciones V, VIII y XIV por lo que respecta a los recursos que proceden ante dicha resolución, así como una debida fundamentación y motivación que sustente los motivos por los cuales se determinó la negativa a reincorporarlo como elemento de dicha institución. También refiere que resulta erróneo que el Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, haya manifestado no ser la persona competente para determinar su reincorporación, puesto que al ser el titular de la corporación, era la persona idónea para resolver su solicitud de reincorporación a la Agencia Estatal de Investigaciones. -----

Por su parte la autoridad demandada aduce que son improcedentes los conceptos de impugnación esgrimidos por la parte actora en su escrito de demanda toda vez que el oficio 1622 de fecha 5 cinco de mayo de 2017 dos mil diecisiete reúne todos y cada uno de los elementos y requisitos de validez previstos en el artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca; así mismo, refiere que en el presente caso no se puede determinar ninguna clase de nulidad prevista en el artículo 178 del mismo ordenamiento legal. -----

CUARTO.- Causales de Improcedencia y Sobreseimiento.- Derivado del imperativo estudio oficioso que establece el artículo 131, in fine, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca se advierte que en el presente caso concreto no se actualiza causal de improcedencia y sobreseimiento que impide un estudio de fondo. Consecuentemente, no se sobresee el juicio. -----

QUINTO.- Estudio de Fondo.- De un estudio integral de las constancias que obran en el expediente natural a rubro citado, se desprende que no le asienta la razón ni el derecho a la parte actora para solicitar la nulidad del oficio 1622 de fecha 5 cinco de mayo del 2017 dos mil diecisiete emitido por el Departamento Jurídico de la Agencia Estatal de Investigaciones donde se determinó la improcedencia de la solicitud promovida por la parte actora y que para su mejor estudio, se transcribe la parte que interesa:

"(...) derivado de lo anterior, me permito informarle a usted, que no es procedente conceder lo que solicita, en virtud de que la Agencia Estatal de Investigaciones, no es la autoridad competente para resolver respecto a su reingreso, recayendo dicha facultad en el Fiscal General del Estado de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 10 y 11 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como por las disposiciones aplicables y contenidas en los Artículos 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento del Servicio de Carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado".

De lo anterior transcrito se colige que en el oficio 1622, la autoridad demandada, hizo de conocimiento a la parte actora que esa no era la instancia oportuna para resolver respecto a su solicitud de reincorporación, manifestando tanto los artículos aplicables, como la autoridad ante quien debía promoverla. -----

Ahora bien, como correctamente indica la autoridad demandada en el oficio impugnado, la respuesta que se emite hacia el justiciable, es en atención a su derecho de petición garantizado en el artículo 8 de la Ley Fundamental; de esa guisa, el oficio impugnado satisface los requisitos de validez previstos en el artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca en su fracción V ya que se encuentra debidamente fundado y motivado puesto que establece de forma fehaciente, indubitable y correcta los artículos en los cuales se basa para negar la reincorporación de la parte actora y también la instancia ante quien debía promoverse. Es importante señalar que resulta inaplicable la fracción VIII del artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa en los términos que la parte actora lo señala, donde se establece que es obligación de las autoridades administrativas mencionar el recurso que proceda en contra de sus determinaciones, puesto que de una interpretación sistemática del numeral y fracción en cita, resulta evidente que el legislador se refería a los recursos en sede administrativa y no a los escritos dimanados del derecho de petición que tienen los administrados como lo es en este caso el acto impugnado que en sí mismo no es un acto administrativo recurrible, sino una contestación al derecho de petición de la parte actora garantizado en el artículo 8 de la Constitución Federal. No es óbice a lo anterior mencionar, que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, estableció mediante jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, los alcances del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Carta Magna y que para un mayor énfasis se transcribe la jurisprudencia en comento publicada en el Semanario Judicial de la Federación a página 2167, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época de rubro y texto siguientes:

DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS.

"El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa".

-el énfasis es propio-

**DATOS
PERSONALES
PROTEGIDOS
POR EL
ARTÍCULO 116
DE LA LGTAIP
Y ARTÍCULO 56
DE LA LTAIPEO**

De lo transcrito en el párrafo que antecede, se sigue que la obligación de las autoridades con respecto al derecho de petición es la de dar respuesta pronta a las solicitudes que se les presenten, sin que ello quiera decir que exista la obligación de proveer de conformidad con lo que solicitan. -----

De ese corolario, el Reglamento del Servicio de Carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado establece que únicamente tratándose de reingreso, la solicitud se presentara por conducto de la Dirección del Servicio Civil de Carrera de la Procuraduría General y la resolverá el Consejo Local de Profesionalización como lo menciona el artículo citado por la autoridad demandada en el oficio 1622¹. Sin embargo, el artículo 191 del mismo ordenamiento legal, refiere que bajo ninguna circunstancia, aun tratándose de remoción injustificada, procederá la reincorporación al servicio². Luego entonces, dado que en un primer término la solicitud de reingreso a la corporación solo puede ser presentada ante la Dirección arriba mencionada, y en virtud de que en el caso de ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ por tratarse de un supuesto donde está prohibida la reincorporación, la autoridad competente para que el actor solicitara lo conducente conforme a derecho, es el Fiscal General de la Procuraduría General del Estado, como se hizo mención correctamente en el oficio 1622 emitido por la autoridad demandada por lo tanto se sigue que la autoridad demandada no se encuentra obligada a acordar el escrito de la parte actora en los términos en que lo solicitó, ni tampoco se encuentra obligada a turnar dicha petición a la autoridad competente de conformidad con la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a página 1042, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, de rubro y texto siguientes:

“INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA EN EL JUICIO DE NULIDAD DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS.

Quando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa advierta que carece de competencia por razón de la materia para conocer de una demanda de nulidad, deberá declarar la improcedencia del juicio en términos del artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin que ello implique vulnerar el derecho de acceso a la justicia reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el ejercicio de este derecho se encuentra sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia, como lo es la carga procesal dispuesta de manera asequible al gobernado, de presentar el recurso efectivo ante el tribunal competente. En las relatadas condiciones, se concluye que, ante la incompetencia por razón de la materia, el referido tribunal no está obligado a remitir el asunto a la autoridad que considere competente.”

-el énfasis es propio-

**DATOS
PERSONALES
PROTEGIDOS
POR EL
ARTÍCULO 116
DE LA LGTAIP
Y ARTÍCULO 56
DE LA LTAIPEO**

¹ Artículo 60. La persona que hubiere renunciado a ser Miembro del Servicio, sin contar con comisión, permiso o licencia conforme al presente Reglamento, habiéndose separado de la Procuraduría General voluntariamente y hubiere transcurrido ya un periodo de tres años a partir de la renuncia respectiva, podrá solicitar al Consejo, a través de la Dirección, reingresar al Servicio con la misma categoría y nivel, siempre y cuando existan las disponibilidades del puesto vacante y presupuestales.

² Artículo 191. Si una resolución jurisdiccional determina que la separación o remoción que sea decretada fue injustificada, la Procuraduría General sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el Integrante, sin que en ningún caso proceda su reincorporación o reinstalación al Servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que hubiere promovido.

Finalmente, el argumento esgrimido por la parte actora donde refiere que el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones por ser su superior inmediato era la autoridad competente para resolver su petición, resulta inoperante puesto que la jerarquía de la mencionada autoridad sobre la parte actora no significa la competencia del mismo para resolver una solicitud de reincorporación al servicio; aunado a lo anterior, se debe tomar en consideración los apotegmas jurídicos de *Nemo Auditur Propiam Turpitudinem Allegans* (nadie puede alegar su propia torpeza) y *Ignorantia Juris Non Excusat* (la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento) ya que si la parte actora desconocía la instancia ante la cual acudir, la autoridad aquí demandada no está obligada a subsanar tal deficiencia dando trámite a su solicitud, sino que su responsabilidad se limita a dar contestación en tiempo y forma del escrito de petición y en todo caso, mencionar la instancia ante la cual debía acudir, como correctamente hizo en el oficio 1622 de fecha 5 cinco de mayo del 2017 dos mil diecisiete. -----

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 177 y 179 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca se; -----

RESUELVE:

PRIMERO.- Esta Sexta Sala Unitaria fue competente para conocer y resolver el presente asunto. -----

SEGUNDO.- La personalidad y personería de las partes quedó acreditada en autos. -----

TERCERO.- Por las razones vertidas en el Considerando Sexto de esta sentencia se declara la VALIDEZ DEL ACTO consistente en el oficio 1622 emitido por el Departamento Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. -----

CUARTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL ACTOR Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA, con fundamento en los artículos 142 fracción I y 143 fracciones I y II, de la Ley de Justicia Administrativa y de Cuentas para el Estado de Oaxaca.- **CÚMPLASE.** -----

Así lo resolvió y firmó el Titular de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca, Magistrado Abraham Santiago Soriano, quien actúa ante el Licenciado Christian Mauricio Morales Morales, Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. -----

DATOS
PERSONALES
PROTEGIDOS
POR EL
ARTÍCULO 116
DE LA LGTAIP
Y ARTÍCULO 56
DE LA LTAIPEO

ROICA ESCUE
MILITAR, NU
LA REFORMA

TEL